



La profesión docente con datos de la Encuesta CIDE 2012

Andrea Ruffinelli
Investigadora del CIDE
Académica de la Universidad Alberto Hurtado

La mayoría de los padres y estudiantes de nuestro país cree que la docencia es una profesión desprestigiada. Este es un dato de la última encuesta CIDE, aplicada a fines del año 2012 a distintos actores del sistema educativo, a nivel nacional (más de 3000 apoderados, más de 5000 estudiantes de 7º y 4º medio, profesores y directores de establecimientos educativos).

El estudio arrojó que quienes creen esto con más fuerza son los estudiantes: menos de la mitad estima que ser profesor es más prestigioso que ser un profesional técnico o que uno de nivel medio (enfermera universitaria, ingeniero de ejecución, por ejemplo). Pero esta valoración no es la misma en los distintos estratos socioeconómicos: los de mayores ingresos son los más críticos, y la gran mayoría (72%) estima que este desprestigio se ha forjado gradualmente en los últimos 30 años, siendo los padres de clases acomodadas los que están más de acuerdo con esto (cerca del 80%).

Por otra parte, sólo la mitad de los padres considera que la sociedad aprecia a sus profesores por su nivel sociocultural. Pero menos de la mitad de los estudiantes piensa lo mismo, en cualquier estrato socioeconómico.

Estas opiniones resultan esperables. Hace 30 años se viene favoreciendo el ingreso de los candidatos menos competentes a carreras de pedagogía, y las remuneraciones de los profesores resultan atractivas únicamente para los sectores más desfavorecidos de la población. Indudablemente esto impacta en el nivel socioeconómico de los profesores y en la apreciación que de este grupo tiene la sociedad, a la vez que habla de la incapacidad sistemática que evidencian los procesos de formación inicial docente para revertir la precariedad del bagaje sociocultural de los docentes que titulan (y no diremos nada respecto de su capacidad para enseñarles a enseñar).

Un poco más de la mitad de los padres y de los estudiantes cree que la sociedad valora sinceramente la profesión docente, apreciación que disminuye en las clases sociales aventajadas a menos del 40%, y, en consonancia, a algo más de la mitad de los padres (53,2%) le gustaría que su hijo/nieto fuese profesor, aunque menos del 20% de los estudiantes manifiesta interés por lo mismo. Y este nivel de interés es relativamente similar entre padres y estudiantes de diferentes estratos socioeconómicos.



Ser profesor se mantiene como aspiración en un segmento más añoso de la población, probablemente más como un recuerdo del prestigio que se asociara históricamente a la profesión, y ha dejado de ser un objeto aspiracional de las nuevas generaciones. No se trata de una profesión deseada por los jóvenes de ningún estrato socioeconómico.

Sin embargo, la oferta de carreras de pedagogía es enorme, y sus cupos se completan con facilidad, y cómo no, si por lustros ha significado un costo de arancel comparativamente bajo, con una nutrida oferta que no exige requisitos e imparte estudios con variadas flexibilidades, representando el nicho de última o única posibilidad para egresados de enseñanza media con dificultades académicas y/o económicas, en una sociedad marcada por un imaginario colectivo que exige educación superior como agente de movilidad social.

En este competitivo escenario, la mayoría de los padres (60,8%) está de acuerdo con incrementar los puntajes de ingreso a carreras de pedagogía, aunque es sólo algo más de la mitad cuando se trata de padres de estratos populares, y más del 70% entre padres de estratos privilegiados: resulta lógico.

Cerca del 80% de los padres aprueba que a su egreso de la carrera los profesores acrediten el dominio de las competencias necesarias para ejercer la docencia y que sean públicos esos resultados por institución. Esta es una evidencia del descrédito de la autonomía de las instituciones y su oferta formativa, de la mano de la asunción del rol de consumidor empoderado que exige resultados por el pago, fruto de un exitoso modelo mercantil y de un movimiento estudiantil y ciudadano que han calado profundo en los actores educativos, pero que sigue aumentando la brecha y empoderando preferentemente a las clases altas, donde casi el 90% de los padres está de acuerdo con la acreditación obligatoria de las competencias docentes al egreso de la carrera, mientras sólo algo más del 70% entre padres de clases populares.

Se evidencia de esta manera que el mercado no funciona como regulador de la educación, al menos porque no se trata de un bien de consumo y no se rige por sus reglas, y porque la población no dispone de las herramientas para interpretar los datos de ese mercado ni con opciones reales para elegir en ese mercado.

Son datos/producto del fragüe de la política educativa de los últimos 30 años, datos y escenario que pretenden revertir políticas recientes como las que se destinan a mejorar la atracción y selección de mejores candidatos a las carreras de pedagogía (beca vocación de profesor); o las que apuntan al fortalecimiento y evaluación de la formación inicial docente (programa y prueba INICIA, significativo financiamiento concursable a propuestas de mejoramiento de la formación docente en universidades, la revisión del sistema de



acreditación de entidades de educación superior y carreras sensibles), que constituyen políticas aún demasiado paliativas y escasamente transformadoras de la esencia de un modelo mercantil sobre el que se sustentan los nocivos efectos hoy observados; y políticas todavía demasiado nuevas para mostrar efectos e impactar profundamente la opinión de los actores del sistema.